

# 2021 Retos Vitales

para una nueva era

## Disyuntiva económica europea: desafíos para España

José María Gay de Liébana Saludas



Claves para entender y mejorar el mundo



Reial Acadèmia Europea de Doctors  
Real Academia Europea de Doctores  
Royal European Academy of Doctors

BARCELONA - 1914



# Disyuntiva económica europea: desafíos para España



**Dr. José María Gay de Liébana Saludas**

Profesor de la Universidad de Barcelona.

Académico de Número de la Real Academia Europea de Doctores (RAED).

## ¿SIMPLE PERTURBACIÓN TEMPORAL?

Lo que empezó siendo una perturbación temporal, en principio de corta duración y efectos pasajeros, devino en un azoramiento en los órdenes sanitario, económico, social e, incluso, político, en algunos países y, ojalá erremos, en una potencial crisis financiera con impactos como la de 2008, aunque tal vez ahora seamos mucho más precavidos tras aquella experiencia.

Aquel virus que irrumpió en la China interior a fines de 2019 y comienzos de 2020, que fue propagándose por su territorio y que luego saltó a Europa, primero a Italia, después a España, y cual mancha de aceite se extendió hacia otros países colindantes para acabar llegando prácticamente a todos los rincones del planeta, no solo se ha cobrado en apenas diez meses numerosas vidas humanas sino también un largo reguero de víctimas económicas.

Sin duda, estamos hablando de la gran crisis, la más severa del siglo XXI, cuyas secuelas económicas, aunque sin destrucción física comparable, son equiparables a los desastres de un gran conflicto bélico como la Segunda Guerra Mundial o al alcance de la Gran Depresión de 1929 aun cuando los mercados financieros, sobre todo en Estados Unidos, prosigan una andadura divergente a la de la economía real.



La crisis generada por la COVID-19, a partir de los meses de febrero y marzo de 2020, implica una brusca disrupción de la actividad económica de una magnitud inicialmente impensable y valor incalculable. Imagen cedida por Pixabay.

El año 2020 desde luego no pasará a los anales como apoteósico sino catastrófico, la tercera ola del coronavirus sigue obligando a confinamientos masivos de la población, a cierres perimetrales de zonas geográficas, a limitaciones en la movilidad de la gente, a imponer medidas restrictivas que, en cierto modo, podrían atentar a las libertades de los individuos, en la presunción que, en algunos países, el Estado de derecho se encuentre en jaque, pero, más allá de cuantas consideraciones se formulen sobre este particular, lo indudable es que se está ante un retroceso de la economía que, al menos en Europa y más concretamente en España, es el más abultado en tiempos de paz. La caída de la economía española en 2020 no tiene parangón salvo que nos remontemos a la Guerra Civil de 1936-1939.

Así, aquel contratiempo de finales del invierno y comienzos de la primavera de 2020 que se suponía efímero se ha convertido en una perturbación severa, temporal, aunque de larga duración por sus consecuencias, global, al afectar a toda la economía mundial y con unos impactos mucho más negativos tanto en el primer semestre como en el segundo que impiden una recuperación ágil de la economía frente a lo inicialmente previsto. La regeneración económica, tal como estuvieron las cosas en el tramo final de 2020 y comienzo de 2021, será lenta y gradual, a expensas de los remedios que vengan de la mano de las vacunas para combatir el virus y de los progresos que se hagan en lo tocante a terapias y tratamientos. En todo caso, el impacto adverso pensando en los hogares con ingresos bajos, en las pérdidas de empleos poco cualificados, en las desapariciones de infinidad de empresas, muchas de ellas de tamaño mediano y pequeño sin capacidad de resistencia financiera para

aguantar la embestida de una crisis de tal dimensión, deriva en riesgos de más pobreza y de multiplicación del riesgo de exclusión social.

En las economías con infecciones decrecientes la recuperación se ralentiza a causa del distanciamiento social, surgen más cicatrices económicas con daños potenciales, tanto sobre la oferta como la demanda, por los confinamientos de 2020 y parte de 2021, a la par que se produce un golpe a la productividad, por ejemplo, en el caso de las empresas supervivientes que afrontan costes adicionales derivados de las necesarias prácticas de seguridad e higiene en los centros de trabajo. Y en las economías con dificultades para controlar la infección, como es el caso de algunos países europeos, a raíz de los rebrotes, los confinamientos más prolongados están infligiendo mayores pérdidas a la actividad económica.

Desde la perspectiva económica, la crisis causada por la COVID-19 no tiene parangón y la recuperación se presume incierta, muy sometida a los vaivenes de nuevas oleadas del virus, dependiendo de que la ciencia pueda aportar soluciones efectivas para atajar la pandemia, por lo que todo tipo de proyecciones que se formulen acerca de la evolución de la economía están marcadas por el sello de la incertidumbre. Tal vez, a modo de alivio y confianza para remontar el rumbo económico, que las condiciones financieras se mantengan en los niveles actuales de 2020 y que las políticas monetarias de los bancos centrales sigan inyectando liquidez en los mercados a tipos de interés a ras de suelo, infunde algo de tranquilidad. Y cuando las previsiones que se trazan apuntan hacia mejoras en 2021 y 2022, no obstante, conviene tener presente que igual los acontecimientos pudieran no coincidir con los augurios que, empero, apuntan a tímidos e insuficientes rebotes económicos.

## **DESGLOBALIZACIÓN *VERSUS* GLOBALIZACIÓN**

A lo largo de 2020, a partir del mes de marzo, con el estallido de la pandemia, las previsiones económicas de distintos organismos fueron gozando de gran predicamento y, posiblemente, en muchos años nunca se les había dado tan-



ta importancia por parte de la opinión pública como en ese año. En cualquier caso, los vaticinios sobre la caída de la economía en el año 2020 son lúgubres y, en particular, respecto a algunos países, malas de solemnidad.

En la zona euro, el grupo de países pertenecientes a la Unión Europea que tiene como divisa común el euro, el golpe económico será más duro que en otros confines y la recuperación para 2021 y 2022 será tibia y más costosa. Las principales potencias de la zona euro son Alemania, Francia, Italia y España. Salvo en Alemania, en los otros tres países el descenso del producto interior bruto (PIB) del cierre de 2020 ha sido fatídico. Una gran parte de la economía de Francia, Italia y España gira en torno a los servicios y, en concreto, al turismo, lo que conlleva un efecto arrastre hacia el resto de sus economías. En cambio, aquellos países tanto de la zona euro como de la Unión Europea en cuya estructura económica prevalece el sector industrial, como sucede en Alemania, se muestran más resistentes a los estragos causados por la pandemia.



Sin duda, la globalización, que en cierta manera impulsó un proceso de deslocalización industrial por abaratamientos de costes, se encuentra, en estos momentos, en la diana de las críticas. Imagen cedida por Pixabay.

Es en este punto donde claman voces entonando un regreso a pasados industriales. Sin duda, la globalización, que en cierta manera impulsó un proceso de deslocalización industrial por abaratamientos de costes, se encuentra en la diana de las críticas. El hecho de que China sea la única, entre las grandes economías del mundo, en que su PIB no solo no entre en números negativos, sino que, pese a las adversas circunstancias, creciera en 2020 y

se prevea que en 2021 volverá por sus fueros con un fornido aumento, exalta ánimos contestatarios que reivindican espíritus nacionalistas, evocaciones proteccionistas e instintos desglobalizadores.

Se abre así un debate entre globalización o desglobalización de la producción. Y si es probable que la economía española, orientada en los últimos años hacia los mercados exteriores y con más énfasis a partir de la crisis de 2008, que obligó a distintos sectores a abrirse al mundo para contrarrestar las disminuciones de sus ventas en el interior, sea sensible a repliegues industriales y comerciales que se den en un futuro inmediato, también hay que considerar la aceleración de la digitalización que propende a un proceso de globalización imparable.

## INQUIETANTES SESGOS FINANCIEROS

Con todo, en un 2020 simplemente calamitoso se constataban repuntes optimistas en los mercados financieros, principalmente en Estados Unidos, dándose una desconexión con el tono ácido de las perspectivas económicas fundamentales.



Hasta cierto punto, la laxitud de medidas de política monetaria y las facilidades de las condiciones financieras daban pábulo a lo que podría ser una burbuja bursátil y que, de cualquier manera, va hinchando el globo de la deuda. Imagen cedida por Pixabay.

Porque en esa batalla que se libra contra los efectos devastadores, económicamente hablando, de la pandemia, haciendo frente a sus embestidas,

intentando atajar su impacto nocivo y sus secuelas, todo vale. Y como el objetivo primordial durante 2020, y así seguirá siendo en 2021 y aún en 2022, fue el de apoyar a la economía, adonde no llegan los gobiernos sí que lo hacen los bancos centrales inyectando liquidez en vena a los actores económicos y poniendo a disposición del sistema financiero cientos de miles de millones de euros. La prioridad absoluta era la de minimizar daños económicos. Sin embargo, tanta lluvia de dinero llegada para reanimar la economía se instrumenta a base de deuda. Y el interrogante es hasta cuándo.

Si la deuda global al acabar 2019 representaba el 320 % del PIB mundial, probablemente al cierre de 2020 se situó en el 356 %, lo que equivale a más de 281 billones de euros. Mientras esa situación dure, el lema se resume en más gastos y menos ingresos, o te hundes o te endeudas. De acuerdo con las actuales condiciones de la política monetaria, con inflación baja y tipos de interés a ras de suelo, en mínimos del 0 %, sin problemas a corto plazo. Pero lógicamente el mundo se encuentra ante un artefacto de efectos retardados: todas esas montañas de deuda, algún día habrá que devolverlas, es decir, pagarlas. Si hablamos de deuda en porcentaje del PIB, la tarea titánica será reducirla y Este constituye un reto ciclópeo cuando la deuda va en aumento y el PIB en descenso. En esa deuda global se incluye el conjunto de la deuda pública o de los gobiernos, la deuda de las empresas, incluidas las entidades financieras, y la de las familias.

El temor, por consiguiente, es que tras la crisis sanitaria y la económica, agravadas por la crisis social y también política, se presente otra arista peliaguda: se está cavando la fosa de otra crisis financiera mundial.

El muro de contención para la normalidad social, y que permita que la actividad económica prosiga con su dinámica habitual, es el sanitario. De ahí que se apele a que los países que vayan dejando atrás los picos de infección, redoblen recursos adecuados para el buen funcionamiento de los sistemas sanitarios. En este sentido es conveniente que la comunidad internacional respalde iniciativas nacionales a través de asistencia financiera cuando las finanzas de determinados países se encuentren limitadas. Evidentemente, se

ha canalizado financiación para la producción de vacunas con el objetivo de que todos los países tengan acceso sin demora a dosis adecuadas y a coste asequible.

El enfoque de la política económica a causa de los confinamientos debe ser el de amortiguar las pérdidas de ingresos de los hogares y apoyar sólidamente a las empresas más sensibles a las medidas restrictivas que obligatoriamente se han impuesto limitando o impidiendo el normal desarrollo de actividades.

En lo concerniente a economías que remontan el vuelo y se reabren después del golpe pandémico, los estímulos y apoyos gubernamentales tendrán que irse retirando gradualmente, promover políticas que incentiven la demanda y, aun cuando suene duro, será preciso reasignar recursos, lo que cristalizará en un trato discriminatorio para aquellos sectores más endebletes a raíz de la pandemia y susceptibles de perder protagonismo.

Lo indudable es que las secuelas económicas de la pandemia están siendo, y serán, más graves de lo previsto.

## **RIESGOS BAJISTAS E INCERTIDUMBRES**

Junto a las secuelas derivadas de la pandemia, actualmente persisten una serie de amenazas entre las que cabe destacar cuál será el tono de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, con un claro trasfondo tecnológico como origen del conflicto, y cuál será la posición estadounidense respecto a la Unión Europea bajo el mandato del elegido presidente Joe Biden, así como la reacción de la Casa Blanca de resultados de la implantación en algún país europeo, como España, de la llamada tasa Google que grava el negocio de las grandes compañías tecnológicas estadounidenses, barajándose un contundente incremento de los aranceles para los productos que entren en suelo norteamericano. También, en la recta final de 2020, se agravó la preocupación tanto en el Viejo Continente como en las islas



británicas a raíz del Brexit que puede castigar a ambos lados del canal de la Mancha. En este punto, es preciso recordar que la estrecha relación comercial entre Europa y Reino Unido en 2019 puede resumirse así: exportaciones de bienes de la Unión Europea de los 27 hacia Reino Unido, 318.700 millones de euros; importaciones de bienes en Europa procedentes de Reino Unido, 193.800 millones; saldo a favor para la Unión Europea, 124.900 millones. En lo concerniente a los servicios, la Europa de los 27 exporta 180.800 millones de euros a Reino Unido e importa 161.200 millones. En conjunto, el volumen de operaciones entre la Unión Europea y Reino Unido mueve 854.500 millones, que representó más del 6 % del PIB de la Europa de los 27 en 2019, con un buen superávit para el continente.

Para España, Reino Unido constituye un socio comercial relevante. En 2019, nuestro país exportó hacia allí bienes por 19.666 millones de euros, importó bienes por valor de 11.808 millones, con un superávit comercial de 7.859 millones y, además, Reino Unido con 18 millones de británicos que visitan la península e islas es el principal país emisor de turistas que en 2019 dejaron en España 17.986 millones de euros. Tener una buena relación con Reino Unido es fundamental para España: más del 3 % de nuestro PIB está en juego y una entrada de divisas de casi 38.000 millones de euros.

Al mismo tiempo, las tensiones van aflorando en el precio y entre los países productores del petróleo. Y el contexto de baja inflación y fuerte endeudamiento de las economías avanzadas se complica por la debilidad de la demanda agregada, con la duda de si se entra en una fase de desinflación o deflación.



La estrecha relación comercial entre Europa y Reino Unido en 2019 puede resumirse así: exportaciones de bienes de la Unión Europea de los 27 hacia Reino Unido, 318.700 millones de euros; importaciones de bienes en Europa procedentes de Reino Unido, 193.800 millones; saldo a favor para la Unión Europea, 124.900 millones. Imagen cedida por Pixabay.

Este panorama, sucintamente expresado, se resume en las previsiones económicas que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentaba el 1 de diciembre de 2020 (tabla I).

**Tabla I.** Proyecciones del PIB, a 1 de diciembre de 2020

País	2020	2021	2022
OCDE	-5,5	3,3	3,2
G20	-3,8	4,2	3,7
Zona euro	-7,5	3,6	3,3
Estados Unidos	-3,7	3,2	3,5
China	1,8	8	4,9
Japón	-5,3	2,3	1,5
Alemania	-5,5	2,8	3,3
Francia	-9,1	6	3,3
Italia	-9,1	4,3	3,2
España	-11,6	5	4
Arabia Saudita	-5,1	3,2	3,6
Argentina	-12,9	3,7	4,6
Australia	-3,8	3,2	3,1
Brasil	-6	2,6	2,2
Canadá	-5,4	3,5	2
Corea del Sur	-1,1	2,8	3,4
India	-9,9	7,9	4,8
Indonesia	-2,4	4	5,1
México	-9,2	3,6	3,4
Reino Unido	-11,2	4,2	4,1
Rusia	-4,3	2,8	2,2
Sudáfrica	-8,1	3,1	2,5
Turquía	-1,3	2,9	3,2

Fuente: OCDE.

## EL PAPEL DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

La evolución de la pandemia, los rebrotes y a la espera de la pócima de las vacunas contra la COVID-19 comportan, entretanto, la aplicación de medidas de contención. La falta de normalidad en la vida cotidiana, los confinamientos, los parones de la actividad económica, se concretan en una crisis de liquidez que agobia a empresas, con mayor sensibilidad en las pequeñas y medianas, autónomos y profesionales, así como en numerosos hogares que ven recortados sus ingresos. La solución ante este problema obliga a recurrir al endeudamiento, generándose una crisis de deuda. El siguiente paso, fatal en ese sentido, deviene en la alta probabilidad de incurrir en una crisis de solvencia por parte de empresas y familias que, según sea su intensidad, confluiría en una crisis financiera.

De ahí, que el sector financiero se arme a través de concentraciones, fusiones, absorciones y adquisiciones para proveerse de más capital y dotarse de resistencia para hacer frente a los embates que resultarían de una crisis financiera.

El Banco Central Europeo (BCE), curtido después de las duras experiencias de los lances posteriores al año 2008, exhorta encarecidamente a la banca europea a que provisione con la debida anticipación cuantos activos sean susceptibles de calificarse como tóxicos. Su generosa política monetaria le lleva a poner en marcha el llamado Programa de Compras de Emergencia por la Pandemia (PEPP), que sumará 1.850 billones de euros, de los que hasta finales de 2020 circulaban 700.000 millones, ampliando la extensión temporal hasta marzo de 2022 al prever las dificultades existentes en 2020 y las complicaciones que se avizoran en 2021 y aún en 2022. Esta perspectiva se traduce en que el BCE atisba con preocupación lo que depare el futuro inmediato, quizá marcando 2023 como el año en que la economía europea retome sus cauces prepandemia.

Gracias a la movilización de sumas tan cuantiosas de dinero para que fluya por los Estados cuya moneda es el euro, a interés mínimo del 0 %, se consigue reducir costes de financiación de los países endeudados de la zona euro y el BCE coloca su balance en 7 billones de euros, el 60 % del PIB de la zona euro.

Esos dineros del BCE permiten que las primas de riesgo de países con sus finanzas públicas en la cuerda floja aguanten, estén sedadas, evitando tensiones financieras que podrían desequilibrar la Europa del euro, dando lugar a serias fricciones, sobre todo, entre el Norte y el Sur de Europa, entre los llamados países frugales o halcones y los tildados de palomas o gaviotas.

También, las inyecciones de dinero del BCE suavizan la caída de la economía del euro en el garrafal 2020 al -7,3 % del PIB, del mismo modo que en años anteriores han dopado parcialmente el crecimiento del PIB de algunos países, como España, donde se calcula que el impulso de Frankfurt ha vigorizado el PIB en un 50 %.

No obstante, el gran reto del BCE es que sus munificas ayudas impulsen la inversión y el consumo en toda la Europa del euro, y la inflación, objetivo no logrado aún. Pero los bajos tipos de interés agrandan la burbuja de la deuda corporativa y hacen temer por las empresas *zombie*, cuya situación financiera y económica pende de un hilo y que con sus resultados de explotación no son capaces de cubrir los costes financieros.

De ahí que un posible endurecimiento de las condiciones financieras, es decir, de más rigurosas exigencias crediticias y repuntes de los ínfimos o nulos tipos de interés, dejaría al descubierto las vulnerabilidades de los prestatarios, desencadenando una intensa tormenta financiera tanto en la propia Europa como en Estados Unidos. En este sentido, el papel de la Reserva Federal puede ser determinante.

## **LA DURA SALIDA DE LA CRISIS ACTUAL**

Del mismo modo, el debilitamiento de la demanda externa supone un mayor shock para el crecimiento mundial, con una caída del comercio mundial de bienes y servicios estimada en el -10,4 % cuando en 2019 solo creció el 1% debido al enfrentamiento entre Estados Unidos y China que repercutió en Europa, cuya economía es claramente exportadora. Para 2021, es previsible que el comercio global crezca algo más del 8%.

De tal suerte, se da un parón en el progreso en la creación de capital humano de los últimos años y deteriora las mejoras experimentadas en el ámbito de la salud al reducirse las tasas de supervivencia, advertirse daños en la matriculación y formación escolar y disminuir el retraso en el crecimiento.

El contexto actual pone de manifiesto una reactivación económica muy floja y una confianza muy débil. La acción de los poderes públicos es la que marca las diferencias para encarar la recuperación y eso explica que haya países que se enfrentan con mejores resultados que otros al golpe sanitario y a las mermas económicas originadas por la pandemia.

Las mejoras, por tanto, afectan a los sistemas de salud, a la protección de personas y empresas, al diseño de la reconversión y reconstrucción económica con la vista puesta en un crecimiento inclusivo, que favorezca a toda la población, duradero, esto es, que sea a largo plazo; y verde, o sea, que encaje en las pautas de la necesaria transición ecológica. Estas son en definitiva las características de aquellos países donde la acción de los poderes públicos está resultando positiva para su población y economía.

En España, malhadadamente, no podemos decir lo mismo. Nuestra recuperación será retardada e incompleta, con indicios de que la recesión derive en depresión y posiblemente hasta 2025 nuestro país no retome sus niveles prepandemia.

En consecuencia, los factores precedentes son los que están aumentando las desigualdades entre países, causando daños irreparables en la población, agitando aumentos de las tasas de pobreza y conllevando cambios estructurales en sectores que cuestionan la continuidad de negocios y empleos.

¿Cómo saldremos de esta?, suele ser una pregunta habitual estos meses, refiriéndonos a la actual crisis. A veces, el mensaje político que se transmite a la opinión pública es que de esta crisis se saldrá más fortalecidos. Sin embargo, conviene ser realistas. El mazazo de la pandemia es indudable y de este



trance saldremos achuchados, sobreendeudados, más proteccionistas, más desglobalizadores, más inmersos en algunos países en depresión más que en recesión, con demasiadas cicatrices económicas y con cambios en nuestros planteamientos de vida. Muchos países saldrán del aprieto pandémico excesivamente endeudados, con déficits insoportables que los abocarán a riesgos de insolvencia y exigirán denodados esfuerzos para reconducir la consolidación fiscal a medio y largo plazo.

Lo peor, pues, en lo relativo a las finanzas públicas no fue en 2020 ni será en 2021, años en que se sigue librando el combate contra la pandemia, sino a *posteriori*, en años venideros, cuando haya que cuadrar las cuentas de las administraciones públicas no solo ajustando gastos a la mínima expresión y forzando ingresos al máximo, suponiendo que haya capacidad recaudatoria fiscal para ello en un previsible panorama económico muy desolado y empobrecido y con elevadas tasas de desempleo, sino generando superávits que permitan atender el servicio de la deuda pública, es decir, satisfacer intereses que tenderán al alza una vez superada la época del interés cero y proceder a ir liquidando vencimientos de deuda pública. De lo contrario, el crac de algunos países será inevitable. Una solución que puede manejarse ante tamañas vicisitudes sería la alternativa de la deuda permanente, aquella que va devengando intereses, pero cuyos vencimientos se sitúan muy a largo plazo, a muchos años.

Con todo, esa posibilidad encierra una especie de estafa social para las siguientes generaciones que no únicamente están viendo peligrar sus pensiones de futuro sino también que serán tales cohortes las que carguen con todo el peso de la deuda pública acumulada en el transcurso de estos años. Y esos endeudamientos estatales, obviamente, restarán competitividad a las economías de los países con finanzas públicas vulnerables que además de carecer de palancas fiscales con las que actuar ante posibles nuevas emergencias que se produzcan, tendrán que someter a sus residentes a una presión fiscal insoportable y carecerán de recursos que aplicar para la transformación de sus modelos económicos.

De los apuros causados por la pandemia, los bancos centrales, que se alzan como protectores de los Estados que están bajo su competencia, como es el caso concreto del BCE, saldrán con sus balances embadurnados de deuda soberana, de calidad relativamente cuestionable, y las dudas acerca de la solvencia de tal deuda soberana puede disparar un peligroso circuito que depare consecuencias complicadas para tales bancos centrales.

La encrucijada de la COVID-19 y su corolario en la faceta económica entraña graves heridas en la educación y en la formación, poniendo en jaque el futuro económico.

Y la pregunta, al menos en España, es si los poderes públicos han brindado la adecuada protección al motor de la economía, que son sus empresas.

## EL CONTEXTO EUROPEO

Para parte de los Estados europeos, sobre todo para aquellos cuya divisa común es el euro, el papel de la Unión Europea es determinante para salir adelante en un escenario tan complicado. La vinculación entre 27 países, tras el adiós de Reino Unido, ofrece una estrecha cooperación y protección, hace realidad hasta cierto punto el dicho de que la unión hace la fuerza, y permite a los países de la zona euro disponer de un precioso escudo protector como es el del BCE.

La vinculación entre los 27 países que forman la UE ofrece una estrecha cooperación y protección que permite a los países de la zona euro disponer de un precioso escudo protector como es el del Banco Central Europeo. Imagen cedida por Pixabay.



Las consignas emitidas desde Bruselas, sede de la Comisión Europea, y Frankfurt, domicilio del BCE, con el apoyo de Washington, donde radica el Fondo Monetario Internacional (FMI), son meridianas: seguir apoyando la recuperación y mantener la estabilidad financiera, evitando el endurecimiento de las condiciones de financiación, y procurando que se transmitan a todos los sectores de la economía los efectos lenitivos de la política monetaria. El lema de tales organismos vendría a ser el de que no desaparezca ninguna empresa ni se pierda ningún puesto de trabajo. Aunque del dicho al hecho...

Es, en ese sentido, cuando se apela a reforzar la cooperación internacional entre países para afrontar los retos comunes, apuntalar los sistemas sanitarios con asistencia de liquidez a países con shock y escasa financiación exterior, superar tensiones comerciales y tecnológicas, evitar diferencias en el comercio multilateral y, al hilo de esos propósitos, esforzarse para mitigar el cambio climático.

## **EL SECTOR BANCARIO ESPAÑOL**

El sector bancario español afronta esta crisis mucho más saneado que en la anterior crisis financiera de 2008 que obligó a un duro proceso de reestructuración bancaria. A finales de 2020 se repitieron episodios de concentración de entidades bancarias si bien bajo una perspectiva cualitativamente distinta. Ahora se trata de ganar tamaño y potenciar capacidades de resistencia ante las nefastas embestidas que se atisban con motivo del golpe brusco que sufre la economía y que serán diferidas, porque la crisis tendrá un impacto significativo en la calidad crediticia. También, esa coyuntura integradora de bancos, procura contar con entidades españolas de cierto relieve que puedan actuar como solventes jugadores con protagonismo en el tapete bancario europeo.

La implementación de avales para préstamos a las empresas concedidos por parte de los Estados mitiga la reticencia de los intermediarios financieros a incurrir en mayores riesgos, especialmente ante las dificultades de las empresas de menor tamaño para acceder a la financiación. La banca juega asimismo

una baza fundamental para reasignar recursos financieros a empresas y sectores que puedan contribuir más a la recuperación de la actividad y del empleo e igualmente a propiciar el camino hacia una transición ecológica apoyando una economía sostenible y, como corrientemente se dice, más verde.

A propósito de la transición hacia una economía más sostenible conviene indicar el papel preponderante de la política fiscal incentivando inversiones y gastos que cumplan con esos objetivos y la necesidad de subvencionar los empeños en pro de la economía verde.

Si a corto plazo la banca española, como gran parte de la europea, se ha convertido en una especie de ángel de la guarda de nuestra economía, facilitando el acceso a la liquidez a empresas y hogares, a medio plazo la crisis actual ejercerá una presión adicional y a la baja para la rentabilidad del sector financiero. Por ello, la banca, además de los desafíos urgentes que encara como la digitalización, la gestión de riesgos de ciberseguridad y los riesgos reputacionales, afronta procesos de reducción de costes de explotación, que van cristalizando en reajustes de plantillas y cierres de oficinas, amén de procesos de fusiones y absorciones, así como aumentos de eficiencia merced a inversiones en tecnología y, por añadidura, la acuciante necesidad de buscar rentabilidades en un sector sistémico, que costea la crisis y se enfrenta a nuevos rivales que operan en el campo tecnológico y de la digitalización.

## TITUBEOS EUROPEOS

No obstante, el dilema durante varios meses de azote de la pandemia ha sido si Europa reacciona o vacila. Finalmente, entrado en el mes de diciembre de 2020, con una demora de casi nueve meses a lo que fue el estallido de la plaga del coronavirus, los líderes de la Unión Europea desbloqueaban la situación de *impasse* y daban luz verde a los fondos europeos anticrisis por importe de 750.000 millones de euros y el presupuesto plurianual del período 2021-2027 por 1,074 billones de euros.

No fue fácil en el seno de Europa alcanzar el acuerdo sobre la puesta en marcha de tales fondos que tendrían que servir para la reconstrucción económica de los distintos países. Por varias causas. La primera de ellas, porque la situación financiera de las cuentas públicas no es la misma en unos países que en otros. La segunda, porque el daño económico provocado por la pandemia tampoco es homogéneo. En tercer lugar, porque se teme, desde el corazón de Europa, que algunos países no se ajusten a la hora de invertir los dineros procedentes de los fondos a las reglas del juego. Cuarto, porque el núcleo duro europeo quiere imponer unas condicionalidades que determinados países del sur rechazan. Y quinta, porque igual algunos Estados confunden la finalidad de estos fondos, que deben actuar como catalizadores de reestructuraciones de modelos económicos, como parche para solventar los problemas estructurales que arrastran sus finanzas públicas.

Bajo ese prisma, el dilema fundamental a lo largo de las discusiones sobre la gestación de esos fondos giraba alrededor, primero, de si los países integrantes de la Unión Europea se constituyen en aliados o no, forzando de este modo posturas radicales que pudieran llevar no solo a extremismos en el cuadro europeo sino incluso a romper la misma unión.

El trasfondo del asunto estriba en la diferente idiosincrasia entre los denominados países frugales –donde se alinean, bajo la égida más difusa y a la sombra en este punto de Alemania, los ortodoxos con la rectitud fiscal como Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Austria, Finlandia, con un guiño favorable de las repúblicas bálticas– y los países del Sur, tachados como frívolos, encarnados esencialmente y en este orden por España e Italia. Baste recordar, a propósito de esas diferencias, que meses antes por parte de algunas autoridades de los países frugales se lanzaron duros alegatos y calificativos sobre la falta de rigor y disciplina fiscal de España e Italia.

El problema clave es que el Sur de Europa, la periferia, de nuevo representada por España e Italia, no tiene dinero ni capacidad de endeudamiento, debilitados ambos países por unos déficits públicos crónicos y acumulando volúmenes de deuda pública preocupantes en el caso de España y peligro-



sos hablando de Italia. Por consiguiente, ni España ni Italia disponen de las necesarias palancas fiscales para salir por sí solas de la catástrofe económica causada por la pandemia, lo que explica que los países frugales, cuyas cuentas públicas se caracterizan por acostumbrar a saldarse con superávit y manteniendo unas cotas de moderado endeudamiento, insistan en que para solventar los problemas derivados de los desequilibrios fiscales, la Unión Europea ya cuente con un dispositivo habilitado para ello: el MEDE, Mecanismo Europeo de Estabilidad, cuya finalidad, como consecuencia de la gran crisis financiera anterior, es la de auxiliar financieramente a los países europeos que se encuentren en dificultades.

No obstante, el MEDE es una figura que todo gobierno procura esquivar considerando la carga emocional, la psicosis y la implacable y prolija lista de deberes que se impone, cuando se rememora la estampa de los temidos «hombres de negro» que pisaron tierras helenas con motivo del rescate e intervención de Grecia, sin olvidarnos de Portugal e Irlanda, y el severo catálogo de ajustes que se implementan. Dicho de otro modo, activar el MEDE para un determinado país equivale a sentenciar a su gobierno y a doblegar a la población a tiempos de austeridad. Y aunque tal vez en lo sucesivo, tras las malas experiencias de Grecia, el libreto de la austeridad se ajustará a un guion menos rígido y más condescendiente para los países susceptibles de ser rescatados por el MEDE y, consiguientemente, intervenidos, el fantasma de que acechen tiempos de recetas ásperas no es bienvenido por el pueblo socorrido, amén de atar en corto la capacidad decisoria y la libertad de movimientos del correspondiente gobierno de turno, cuando no un efectivo cambio de gobernanza.

En definitiva, la discusión entre el Norte y el Sur de Europa, por más que se llegara a un consenso sobre la aprobación de los 750.000 millones de euros de los fondos europeos para la reconstrucción, persiste y con toda probabilidad se sentirá más según vaya fluyendo el dinero hacia los países destinatarios. Porque, insistimos, no todas las naciones europeas tienen la misma necesidad sobre esos fondos ni idéntica filosofía sobre su percepción y aplicación.

## FONDOS EUROPEOS Y SITUACIÓN FISCAL

Por más que en un afán de abreviar nos ciñamos al año 2019, la perspectiva que ofrece el saldo fiscal de los Estados miembros de la Unión Europea, así como Reino Unido, es lo suficientemente expresiva para interpretar las dos velocidades a que están sometidas las cuentas públicas de cada país de conformidad con los datos de Eurostat relativos a dicho año.

En lo pertinente al déficit público en 2019, la tabla II muestra la panorámica de los países europeos, según los últimos datos de Eurostat.

**Tabla II. Déficit público de la Europa de los 27 más Reino Unido en 2019**

País	2019: Déficit público (en % sobre el PIB)
Alemania	1,5
Austria	0,7
Bélgica	-1,9
Bulgaria	1,9
Chequia	0,3
Chipre	1,5
Croacia	0,4
Dinamarca	3,8
Eslovaquia	-1,4
Eslovenia	0,5
España	-2,9
Estonia	0,1
Finlandia	-1
Francia	-3
Grecia	1,5
Hungría	-2,1
Irlanda	0,4
Italia	-1,6
Letonia	-0,6

Cont...

País	2019: Déficit público (en % sobre el PIB)
Lituania	0,3
Luxemburgo	2,4
Malta	0,5
Países Bajos	1,7
Polonia	-0,7
Portugal	0,1
Reino Unido	-2,3
Rumanía	-4,4
Suecia	0,5

Fuente: Eurostat.

Y la tabla III refleja el volumen de deuda pública existente al cierre de 2019, según datos de Eurostat.

**Tabla III. Deuda pública al cierre de 2019 de la Europa de los 27 más Reino Unido**

País	2019: Deuda pública (en % sobre el PIB)
Alemania	59,6
Austria	70,5
Bélgica	98,1
Bulgaria	20,2
Chequia	30,2
Chipre	94
Croacia	72,8
Dinamarca	33,3
Eslovaquia	48,5
Eslovenia	65,6
España	95,5
Estonia	8,4
Finlandia	59,3
Francia	98,1
Grecia	180,5

Cont...

País	2019: Deuda pública (en % sobre el PIB)
Hungría	65,4
Irlanda	57,4
Italia	134,7
Letonia	36,9
Lituania	35,9
Luxemburgo	22
Malta	42,6
Países Bajos	48,7
Polonia	45,7
Portugal	117,2
Reino Unido	85,4
Rumanía	35,3
Suecia	35,1

Fuente: Eurostat.

Observando los niveles de deuda pública de Alemania, Países Bajos, Suecia, Finlandia y Dinamarca, así como de Estonia, Letonia y Lituania, y comparándolos con los de España, Italia, Grecia y Portugal, se entiende el porqué de la postura drástica del Norte frente al Sur.

En lo concerniente a la financiación que España recibiría con cargo al Plan Europeo de Recuperación y que, en cifras redondas, alcanzará 140.000 millones de euros, conviene formular algunas precisiones.

Ante todo, que una cosa son los 140.000 millones de euros procedentes de los 750.000 millones que en total moviliza la Unión Europea, a título de recursos preconcedidos y que para ser efectivos deberán responder a proyectos convincentes, de los que España recibiría 72.700 millones en transferencias no reembolsables, como subvenciones a fondo perdido que tendría que asignarse entre 2021 y 2022 y ejecutarse a lo largo de un período máximo de seis años, y 67.300 millones en créditos, para reconstruir la economía, y, otra

cosa distinta, es que España tenga que ser rescatada debido a su actual deuda y déficit públicos por cuenta del antedicho MEDE.

Por ende, estamos ante instrumentos diferentes que en ambos casos estarán sometidos a que se cumpla con una serie de condiciones colaterales a los requisitos de uso de los fondos. Porque la primera exigencia es la existencia de planes económicos coherentes y consistentes en que invertir los 140.000 millones de euros y la historia pone de relieve que nuestro país no ha sabido aprovechar íntegramente durante años las cuantías de los distintos tipos de fondos estructurales y de cohesión habilitados por Europa, en gran parte por culpa de las excesivas burocracias y solapamiento de tantas Administraciones Públicas que cohabitan en España, caracterizadas además por una manifiesta falta de empatía hacia los sectores empresariales.

Advierta el lector que en un párrafo anterior hemos empleado el tiempo condicional de que España «recibiría». Concretemos. El dinero que llegaría de Europa sería una excelente oportunidad para dinamizar la economía española pero lógicamente representa todo un desafío. Se trata de que esas sumas con origen en Europa se canalicen hacia una transformación efectiva de nuestra economía basada en tres ejes primordiales como son la transición ecológica, la transformación digital y la reindustrialización de nuestro país.

La transición ecológica afecta, en general, a desplegar fuentes de energía renovable, optar por la movilidad urbana sostenible, implementar planes de rehabilitación de vivienda, inversiones en infraestructuras eléctricas, promover redes inteligentes... La digitalización incumbe prioritariamente a sectores como la salud, la automoción, el turismo, el comercio y decantarse hacia la llamada economía circular en la construcción, el textil, la agroindustria, la electrónica...

Con todo, es de recibo puntualizar que los recursos tramitados desde Europa se devolverán ya sea en forma de mayores contribuciones a la Unión Europea como a través de la devolución de préstamos, lo que comportará exigencias de reformas y nuevos impuestos para aumentar la aportación de España a la Unión Europea de los 27.



La Unión Europea, para disponer de los 750.000 millones de euros, tiene que recurrir a los mercados financieros, solicitando y recibiendo el dinero, para lo cual fijará un plazo de devolución de 30 años, de 2028 a 2058. Tales caudales obtenidos en forma de préstamo, por ejemplo, emitiendo bonos pagaderos a vencimientos determinados, devengarán unos intereses; la actual política monetaria de tipos de interés en mínimos no será para siempre. Y la Unión Europea tendrá que devolver el dinero recibido para lo cual tendrá que contar de, una parte, con el reembolso por parte de los países prestatarios de las cantidades prestadas –67.300 millones de euros en el caso de España– y, de otra parte, con una mayor aportación por parte de los Estados miembros que compense los pagos que la Europa de los 27 tendrá que hacer a sus acreedores.

Hechas estas puntualizaciones, apostillemos un resquemor. Al hablar de los efectos lenitivos de los fondos europeos, de los susodichos 140.000 millones de euros que, dicen, serán motor de la recuperación económica de España en 2021, vienen a la mente de este escritor aquellos pasajes del capítulo X del Quijote cuando el ingenioso hidalgo instruye a Sancho Panza sobre el bálsamo de Fierabrás, del que Don Quijote tiene la receta en la memoria y con el cual, dice el Caballero de la Triste Figura, *«no hay que tener temor a la muerte ni pensar morir de ferida alguna...»*.

No obstante, la duda, sobre esa especie de bálsamo de Fierabrás que vendría a ser el efecto de los fondos europeos, es si valdrán para reactivar nuestra economía a la vista de los cierres de pequeñas y medianas empresas y las condiciones exigidas para acceder a ellos. Los requisitos para tocar el dinero procedente de Bruselas se ajustan a unas prioridades: digitalización, economía verde, competitividad industrial, en suma, estipulaciones que sí cumplen grandes empresas pero que no se dan en tantísimas pequeñas y medianas empresas, que, así las cosas, oirán hablar del dinero de Europa al que difícilmente podrá acceder el 95 % de nuestro tejido empresarial formado por pymes y autónomos.

De nuevo, el mítico *Bienvenido Mister Marshall* de Luis García Berlanga, con Pepe Isbert, Manolo Morán, Lolita Sevilla y otros actores como protagonistas, y el castellano pueblo de Villar del Río, me temo, que recobrará plena vigencia... Y los fondos pasarán a toda velocidad sin detenerse...

## LA SENDA DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE ESPAÑA

### Debilidades económicas

La parte final de este capítulo intenta sintetizar las debilidades de un modelo económico frágil y la vulnerabilidad de unas finanzas públicas erráticas que agudizan el impacto de la COVID-19 en la economía española.

Esta crisis, con distintas aristas como son la sanitaria, la económica, la social y la política, con el riesgo de añadir la financiera, se ha cebado con nuestra economía. La eclosión de toda crisis conlleva un doble frente: mitigar el golpe y prepararse para el futuro. Lo primero implica poner en marcha una fase de choque con los claros objetivos de contención sanitaria y de emergencia económica. El segundo paso consiste en diseñar el plan de relanzamiento y viabilidad de la economía española.

Sobre el shock que ha supuesto la pandemia en nuestro país, podemos remitirnos a los primeros párrafos de estas líneas. Pero sí conviene preguntarse por qué en España se han recortado los presupuestos o, cuando menos, no se ha dotado a nuestra sanidad de los recursos necesarios. Si comparamos el gasto público en sanidad de España con los demás países europeos, tomando como fuente Eurostat, de inmediato nos percatamos de la baja contribución que se hace (tabla IV).

**Tabla IV. Porcentaje de gasto público en sanidad en relación al PIB en 2018**

<b>País</b>	<b>Gasto público (en % sobre el PIB)</b>
UE-28	7,1
Eurozona	7,1
Alemania	7,2
Austria	8,2
Bélgica	7,6
Bulgaria	5
Chipre	2,7

*Cont...*

País	Gasto público (en % sobre el PIB)
Croacia	6,2
Dinamarca	8,3
Eslovaquia	7,3
Eslovenia	6,6
<b>España</b>	<b>6</b>
Estonia	5,1
Finlandia	7
Francia	8,1
Grecia	5
Hungría	4,7
Irlanda	5
Italia	6,8
Letonia	4
Lituania	5,9
Luxemburgo	4,7
Malta	5,3
Países Bajos	7,6
Polonia	4,8
Portugal	6,3
Reino Unido	7,5
República Checa	7,6
Rumanía	4,7
Suecia	7

Fuente: Eurostat.

En el aspecto puramente económico, cabe cuestionarse sobre las causas que han conducido al severo correctivo y a la desproporcionada destrucción de nuestra economía productiva, con infinidad de autónomos, pymes, empresas de mayor tamaño y cientos de miles de trabajadores en la cuerda floja, exhaustos por la falta de liquidez y avizorando una cascada de insolvencias. Con rotundidad cabe afirmar que, si en este complicado período de crisis se facilitaran más ayudas y subsidios y renunciado por parte del Eje-

cutivo a ingresos tributarios y cotizaciones sociales, no se narraría lo que tiene visos de convertirse en un desastre.

La caída de nuestra economía en el tercer trimestre de 2020 en comparación con el mismo trimestre de 2019 no deja resquicio a la duda. España es el país de Europa con el mayor derrumbe económico a la vista de los datos proporcionados por Eurostat (tabla V).

**Tabla V. Comparativa de la caída de la economía en diversos países europeos**

<b>País</b>	<b>Tercer trimestre de 2020 vs tercer trimestre de 2019</b>
Zona euro	-4,3
UE-27	-3,9
Bélgica	-5,2
República Checa	-5,8
Alemania	-4,2
Francia	-4,3
Italia	-4,7
<b>España</b>	<b>-8,7</b>
Letonia	-3,1
Lituania	-1,7
Austria	-5,3
Portugal	-5,8

Fuente: Eurostat.

De igual manera, es preciso enfatizar acerca del esfuerzo que por parte de las autoridades se ha hecho para salvar a nuestra economía. De aquella grandilocuente movilización de recursos por importe de 200.000 millones de euros anunciada en marzo de 2020 a lo que han sido los números reales, existe una abominable diferencia y más aún si se compara con el auxilio otorgado por otros países en favor de sus economías productivas.

En las tablas Vi y VII, y de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional, se presenta, primero, el gasto público y los recursos efectivamente movilizados en concepto de ayudas públicas concedidas por una serie de países hasta el mes de septiembre de 2020 a consecuencia de la pandemia y, segundo, las garantías públicas otorgadas ante el impacto de la crisis.

**Tabla VI. Porcentaje de gasto público y recursos públicos movilizados del PIB de diversos países del mundo**

<b>País</b>	<b>Gasto público y recursos públicos movilizados (en % PIB)</b>
Nueva Zelanda	21,5
Singapur	20,8
Alemania	14,4
Australia	12,7
Canadá	12,7
Estados Unidos	12,1
Japón	11,3
Reino Unido	9,2
Dinamarca	8,5
Noruega	7,1
Francia	6,2
Suecia	5,4
Italia	5,1
Suiza	4,9
Países Bajos	4,6
Chequia	4,4
Bélgica	4,2
España	3,6
Finlandia	3,6
Corea del Sur	3,5

Fuente: FMI.

**Tabla VII. Porcentaje de garantías públicas otorgadas en diversos países del mundo**

<b>País</b>	<b>Garantías públicas otorgadas (en % PIB)</b>
Italia	32,8
Alemania	24,8
Japón	23,7
Reino Unido	16,5
Chequia	15,4
Francia	14,8
España	14,1
Bélgica	11,8
Corea del Sur	10,3
Dinamarca	6,4
Suiza	6,2
Finlandia	5,9
Suecia	5,1
Países Bajos	4,3
Noruega	4,3
Estados Unidos	2,2
Nueva Zelanda	2,1
Australia	1,1
Canadá	1,1
Singapur	0

Fuente: FMI.

Proponer ideas sobre lo que tendría que ser la fase de recuperación de la economía española, diseñando un plan de viabilidad y relanzamiento, comporta constatar de qué males adolece y qué ajustes habría que poner en marcha, con cierta urgencia, para enderezar el rumbo a tenor del escenario que emergerá como consecuencia de la pandemia.

Las variaciones del PIB han sido durante los últimos años más bien modestas lo que evidencia un modelo productivo falto de competitividad (datos según INE y Eurostat).

**Tabla VIII. Variación porcentual del crecimiento del producto interior bruto**

Año	Crecimiento PIB en variación porcentual respecto al año anterior
2007	3,8%
2008	1,1%
2009	-3,6%
2010	0,0%
2011	-1,0%
2012	-2,6%
2013	-1,7%
2014	1,4%
2015	3,8%
2016	3,0%
2017	2,9%
2018	2,4%
2019	2,0%
2020	-11,0%
2021 (previsión)	5,0%
2022 (previsión)	4,0%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Eurostat.

El volumen del PIB español pasó de 1.109.656 millones de euros en 2008 a 1.244.772 millones en 2019. Sin embargo, tras la debacle de 2020 el PIB se ha visto reducido a 1.119.976 millones de euros, de manera que el retroceso de la economía española ha sido gigantesco y la podría llevar, de nuevo, a la casilla de 2008. Las previsiones más optimistas del gobierno señalan que el PIB en 2021 ascenderá a 1.224.728 millones de euros, lo que significaría



un crecimiento de la economía española cercano al 10 %, lo cual está por ver a la vista del panorama resultante de la situación crítica de 2020 y 2021, con un tejido productivo muy noqueado, con un empleo muy trastabillado y con un sector tan importante como el turismo en horas muy bajas.

Para hacernos una composición de lugar digamos que, si en 2008 la renta per cápita en España era de 24.130 euros, en 2019 fue de 26.430 euros. Al compararnos con otros países de nuestro entorno europeo, vemos en la tabla IX que España se encuentra en un nivel bajo (datos de Eurostat e INE).

**Tabla IX. Renta per cápita en 2019**

País	2019. PIB per cápita (€)
Alemania	41.350 €
Austria	44.920 €
Bélgica	41.200 €
Bulgaria	8.680 €
Chipre	25.310 €
Croacia	13.260 €
Dinamarca	53.430 €
Eslovaquia	17.270 €
Eslovenia	22.980 €
España	26.430 €
Estonia	21.160 €
Finlandia	43.480 €
Francia	35.960 €
Grecia	17.500 €
Hungría	14.950 €
Irlanda	70.470 €
Italia	29.610 €

Cont...

País	2019. PIB per cápita (€)
Letonia	15.930 €
Luxemburgo	102.200 €
Malta	26.490 €
Países Bajos	46.710 €
Polonia	13.780 €
Portugal	20.740 €
Reino Unido	37.760 €
República Checa	20.640 €
Rumanía	11.500 €
Suecia	46.130 €

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Eurostat.

¿Cuáles tienen que ser las pautas para conseguir que España desarrolle el crecimiento potencial de su economía?

### **Modelo productivo falto de competitividad**

La primera consideración tiene que ser la mejora de nuestra productividad, fomentando la dinámica y el crecimiento empresarial, que es bajo, acrecentando el capital humano, que hoy se distingue fatalmente por su baja cualificación, e intensificar fuertemente las inversiones en capital tecnológico.

La economía española está demasiado concentrada en servicios, incluyendo el comercio, que representan el 68 % de nuestro PIB (tabla X), mientras que la industria que en 1973 tenía un peso del 38,6 % hoy apenas supone el 11 % del PIB, según los datos del INE (tabla XI).

Tabla X. Modelo productivo de España, según el peso sectorial en el producto interior bruto

Peso sectorial (en % sobre el PIB)						
Sector	Año					
	1960	1970	1980	1990	2000	2019
Agricultura	22,3	10,7	7,1	4,6	3,8	2,7
Industria y energía	28,7	32,9	30,2	25,6	18,8	14,2
Construcción	5,5	9,1	8,4	9	9,3	5,9
Servicios	43,5	45,2	52,5	54,6	58,5	67,9
Impuestos	0	2,1	1,8	6,2	9,6	9,3
Total sectores	100	100	100	100	100	100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Tabla XI. Porcentaje en el PIB del peso de la industria en España, por década e hito

Hito	Peso de la industria en el PIB (en %)
1973: Crisis del petróleo	38,6
1981: Reconversión industrial	27,7
1986: Ingreso en la CEE	27,2
1991: Recesión	23,4
1999: Boom inmobiliario	16,2
2008: Crisis financiera	13,3
2018: Cambio de gobierno	11,2
2019: Año prepandemia	11,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

El reducido tamaño empresarial, con un predominio absoluto de pequeñas y medianas empresas, al punto que de las 2.894.419 empresas registradas en febrero de 2020 según CEPYME, únicamente 4.960 contaban con 250 o más asalariados, es un serio hándicap para empujar a una economía excesivamente decantada hacia los servicios y muy poco hacia la faceta industrial. Potenciar el crecimiento de nuestras pequeñas y medianas empresas, cuya productividad de los factores es menor que la de las empresas europeas y

que en los últimos veinte años ha crecido a una tasa anual promedio del 0,2 %, bastante por debajo, por ejemplo, de las de Alemania y Estados Unidos,



Potenciar el crecimiento de nuestras pequeñas y medianas empresas es un reto significativo para la economía de España. Fotografía gentileza de Miquel Ventura

Desafortunadamente, las empresas españolas topan con un marco regulatorio desalentador tanto en lo relativo a la creación de empresas como a la regulación de diversos sectores, como el comercio minorista, ciertos segmentos del transporte y servicios profesionales, un sistema fiscal muy exigente y coercitivo, carente de empatía y psicología tributaria, incómodo y con una presión fiscal directa e indirecta agobiante, un funcionamiento del sistema judicial que no es el más apropiado; un régimen regulador de situaciones de insolvencia que con más razón aún a causa de esta época de pandemia tendría que ser revisado y actualizado para ajustarlos a la situación presente, y, por añadidura, el empresariado español se enfrenta a un sinfín de problemas derivados de la falta de unidad de mercado, sin que se perciba una actitud por parte de las Comunidades Autónomas tendente a aliviar las trabas consiguientes.

Si durante muchos años, como se decía, el desarrollo de la economía mundial se ha debido en una parte sustancial al proceso de globalización de la producción, la actual crisis de la COVID-19 pone al descubierto las vulnera-

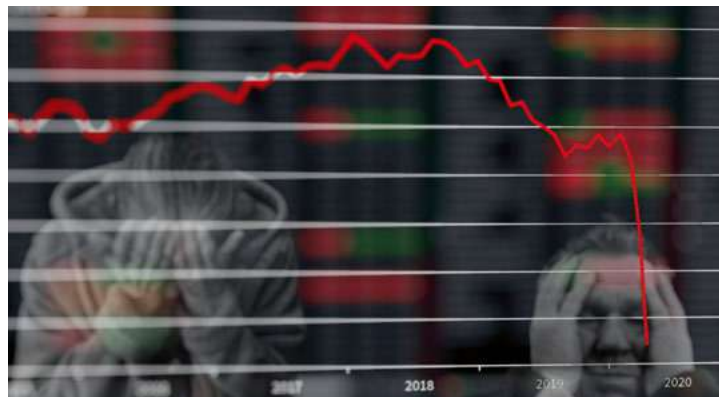
es un reto significativo. A la sazón, priorizar el uso de fondos europeos para impulsar inversiones que ayuden a reconvertir al tejido empresarial español y, en especial, a las pymes, debe ser una de las referencias preeminentes para 2021. No solo se trata de que nuestras empresas mejoren en lo tocante a la productividad, sino que a la vez adquieran una mayor solidez financiera, que les permita disponer de una mayor capacidad de resistencia y resiliencia ante los nuevos tiempos que están llegando.

bilidades vinculadas a la globalización y los riesgos que se derivan de las políticas proteccionistas. Es obvio que España, en el juego económico y comercial mundial, debería tener un mayor peso –en los últimos años se evidencia una clara falta de influencia de nuestro país en organismos internacionales y europeos– en aras de apoyar un comercio global fundamentado en reglas multilaterales y sobre la base de la libre competencia. No es baladí tal proposición por cuanto, como se ha indicado, España se ha abierto hacia los mercados exteriores y ese progreso aperturista es primordial para vigorizar nuestro crecimiento, si bien, bajo las actuales circunstancias que concurren en 2020 y 2021, esa cualidad hace sensible a nuestro país ante los eventuales movimientos de repliegue del comercio internacional que ya se están dando y que pueden agudizarse en los próximos meses.

## Capital humano

El capital humano es decisivo para el desarrollo económico y la prosperidad de un país. Lo demuestra Estados Unidos con sus cientos de científicos e investigadores laureados con el Premio Nobel, habiendo convertido el territorio estadounidense en un hábitat muy propicio para que el talento encuentre allí su caldo de cultivo con las sinergias que ello conlleva, en una comunión permanente y excelente entre empresas, universidades y escuelas de negocio.

En España, los niveles educativos en promedio de nuestros trabajadores y empresarios son inferiores a la media europea, y las tasas de abandono y fracaso escolar en España son elevadas. Imagen cedida por Pixabay.



En España los desafíos en esta esfera son cruciales, máxime en un momento de reformas educativas bajistas que permiten a alumnos con asignaturas suspendidas obtener el título de bachillerato y otros cambios que rebajan sustancialmente el nivel formativo de nuestros alumnos, como es el conocimiento y aprendizaje de la lengua. La realidad, hoy por hoy, es que los niveles educativos en promedio de nuestros trabajadores y empresarios son inferiores a la media europea, que las tasas de abandono y fracaso escolar en España son elevadas y que cada vez se agudiza más la brecha negativa en los indicadores de calidad educativa.

La globalización, el progreso tecnológico, la automatización de tareas, la inteligencia artificial, la robotización, el internet de las cosas..., imponen unos retos ante los que es imprescindible rediseñar institucionalmente nuestro sistema educativo, revisar el contenido curricular y robustecer los propios sistemas de aprendizaje, de manera que se favorezca la orientación temprana e individualizada del alumnado y que en el ámbito universitario se proceda a una idónea selección del personal docente e investigador, se adecúen los planes de estudio a las necesidades del mundo real y de nuestro modelo económico y que la formación profesional merezca la atención que necesita, dedicando recursos a fin de lograr una óptima combinación entre la formación general y la experiencia práctica en empresas.

España en 2018 solo destinaba un gasto público en educación equivalente al 4,21 % del PIB, con un gasto per cápita de 1.009 euros, mientras que otros países de nuestro entorno dedican más del 5 %, entre ellos, Austria, Bélgica (6,55 % del PIB) y los países del norte de Europa todavía realizan un esfuerzo mayor, como Dinamarca (7,63 %), Finlandia (6,90 %), Noruega (7,98 %), destacando gasto per cápita de 5.080 euros en Noruega, 3.705 euros en Suiza, 3.595 euros en Dinamarca, 2.730 euros en Finlandia...

En definitiva, el capital humano es uno de los grandes activos que arma a un país y conviene tener muy en cuenta la inversión que requiere para preparar el futuro. Y es que esta crisis de la COVID-19 está acelerando el proceso de digitalización de nuestra economía, por ejemplo, demostrando las enormes

posibilidades del teletrabajo que antes del síncope pandémico era muy reducido. Ahora, inmersos ya en esta incipiente modalidad laboral conviene favorecer toda su carga positiva y mitigar sus inconvenientes, sin perder de vista que a la hora de la verdad la productividad del teletrabajo puede ser inferior a la del trabajo presencial y que imponer una legislación muy rígida podría derivar en la deslocalización fuera de España del teletrabajo, que exigirá una intensificación de las políticas de formación para aprovechar oportunidades de empleo. Del mismo modo, el avance experimentado por el comercio electrónico durante el confinamiento y con posterioridad al mismo es impresionante, con un fuerte impacto en el sector logístico, y es indiscutible su intensificación en el futuro con todas las implicaciones que suscita en las dinámicas de la competencia empresarial. Tal vez, en nuestro país se está dando hoy en día una efervescencia del comercio *online* en un gran número de empresas que hasta el estallido de la pandemia poco habían explotado sus posibilidades. También, pues, en el comercio electrónico las empresas españolas tienen que desplegar sus dotes para contrarrestar el protagonismo asumido por grandes corporaciones internacionales y las llamadas empresas tecnológicas.

## **Investigación y desarrollo: asignatura suspendida**

Eso conduce a un porqué muy concreto a propósito de la potencia económica de los países: el gasto en investigación y desarrollo.

El futuro no llega; el futuro se construye. Cada cual y cada uno, accede a su futuro en función de lo que siembra. Unos siembran vientos y recogen tempestades. Otros plantan semillas y luego recogen los frutos. Invertir hoy en investigación y desarrollo, en quehacer científico, en innovación, en estudio, en conocimiento, es labrar el mañana de unos dividendos plasmados en progreso y prosperidad; de un mañana mejor y de calidad, de recio auge económico.





España no se está preparando para el futuro. En 2019 solo destinó el 1,25 % del PIB a gasto en I+D. Eso equivale a apenas 15.572 millones de euros, lo que nos pone a la cola de los países avanzados en esfuerzo en investigación y desarrollo. Imagen cedida por Pixabay.

España en 2019 solo destinó el 1,25 % del PIB a gasto en I+D. Eso equivale a apenas 15.572 millones de euros. Es cierto que tal importe supera al habido en 2018 cuando se destinó el 1,24 % del PIB, 14.946 millones de euros, a I+D, pero esa nimiedad de cifras de 2019 nos pone a la cola de los países avanzados en esfuerzo en investigación y desarrollo.

España no se está preparando para el futuro. Así que el mañana llegará y nos dará una grave cornada. Suecia, que destina a I+D el 3,32 % de su PIB; Austria, el 3,14 %; Alemania, el 3,12 % y Dinamarca, 3,03 %, son países en el marco de la UE, que están tallando ese futuro que vendrá. Lo mismo que Suiza, que destina el 3,29 % de su PIB a I+D. O Japón, con el 3,28 %. O el referente: Corea del Sur, cuyo esfuerzo en I+D equivale al 4,53 % del PIB, más de 66.000 millones de euros. Ahí está Corea del Sur y acá España, con nuestros 15.572 millones. En 2019, Amazon, la temida pero imparable, tuvo un gasto en I+D de casi 36.000 millones de dólares: el 13 % de su facturación. Alphabet, más de 26.000 millones de dólares: el 16 % de sus ingresos. Facebook, 13.600 millones: el 19 % de sus ventas. Esas son empresas, como Apple, Micro-

soft, Alibaba, Tencent y otras muchas, que no solo escriben el futuro: son sus guionistas y quienes lo producen. Y aquí estamos a verlas venir.

Incrementar, en consecuencia, el capital humano y tecnológico para ganar en productividad constituye un desafío crucial para nuestro país que tiene que reformular con premura los pilares fundamentales sobre los que basar las estrategias de crecimiento.

La economía española se halla rezagada tecnológicamente con una proporción de empresas innovadoras en España que está muy lejos de los porcentajes de Francia, Italia, Alemania, con un peso sobre PIB inferior al promedio europeo. Eso conlleva la necesidad de que se hagan mayores dotaciones presupuestarias del Estado para capital tecnológico, que se remodele con tino el sistema de promoción y de carrera investigadora, que se favorezca la entrada y el desarrollo de nuevos investigadores con elevado potencial y que se potencien centros en favor de la excelencia académica. Sin embargo, la realidad actual está distante de tales recomendaciones.

Los fondos europeos, a los que antes nos referíamos, pueden desempeñar un eficiente papel como catalizadores siempre que lleguen a todas las capas de nuestro tejido empresarial y se manejen al margen de ínfulas políticas y de tics que procuren contentar a aliados políticos, con sentido económico para impulsar los distintos sectores económicos. Porque la realidad indica que España anda escasa de impulsos empresariales capaces de transformar sus cimientos económicos y de hecho llevamos décadas con las mismas compañías liderando el mapa productivo.

Mientras que en Wall Street en las últimas décadas se han dado variaciones significativas entre las grandes compañías que predominan en el podio de la capitalización bursátil, y de unos años acá son las grandes tecnológicas las que copan los puestos preeminentes, en España, tomando como referencia nuestro IBEX 35, el cuadro de honor apenas ha sufrido alteraciones. Eso constituye un afidávit de lo que sería una falta de brío empresarial, de iniciativas renovadoras y transformadoras de nuestra economía

o, lo que sería peor, que las buenas y prósperas iniciativas no encuentran un territorio favorable por estos pagos para desarrollarse y es entonces cuando nuestro talento emigra y España, paso a paso, se va empobreciendo económicamente.

## Paro y precariedad laboral

Entre los retos de nuestra economía, sobresale la inaplazable reducción del desempleo y de la precariedad laboral. En España se constata una deficiencia harto evidente: desde 1980 la tasa de paro promedio se sitúa en el 17 %. Concretamente, en los últimos meses de 2020, la tasa de paro, según Eurostat, oscilaba entre el 16,2 % y el 16,5 %, siendo, junto con Grecia, la más alta de la Unión Europea que se sitúa sobre el 7,6 % y doblando a la de la zona euro que es del 8,4 %, y muy por encima de otros países europeos.

Como antes se señalaba, que nuestra economía dependa en gran manera de los servicios y que estos empleen al 76 % de quienes trabajan supone un riesgo, más intenso en tiempos de pandemia, debido, sobre todo, al tipo de servicios que ofrece nuestro país y, en general, al bajo valor añadido de los mismos, según revelan los datos históricos del INE (tabla XII).

**Tabla XII. Peso del empleo sectorial en porcentaje sobre el empleo total, en España**

Sector	Año					
	1960	1970	1980	1990	2000	2019
Agricultura	40,5	30,5	18,8	11,8	6,1	4
Industria y energía	23,5	24,8	27,2	23,7	18	14
Construcción	6,7	8,5	9	9,7	10,9	6
Servicios	29,2	35,8	44,9	54,8	65	76
Total Empleo	100	100	100	100	100	100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Las situaciones de desempleo son más complicadas para las personas con baja cualificación, perjudican más a las mujeres y a los jóvenes, ponen en un brete comprometido a personas mayores de 45 años que pierden su empleo por las dificultades y se agravan en el caso del empleo temporal. De hecho, la persistencia de situación de desempleo se agrava si se tiene en cuenta que en 2019 el 43 % de los parados llevaba más de un año en búsqueda de empleo y que los trabajadores más afectados por la actual crisis son los mencionados colectivos y, en promedio, el paro afecta más a las personas que cuentan con menor formación.

El uso de los fondos europeos, como de hecho la propia política fiscal española, debiera poner el acento en habilitar mecanismos para el seguimiento y orientación de las personas en paro, implementar con efectividad políticas activas de empleo y, aprovechando la coyuntura ante los posibles cambios que se darán en la estructura sectorial de la ocupación, reforzar la formación continua de manera que pueda llevarse a cabo un trasvase de desempleados de larga duración y personas en riesgo de pérdida de empleo en sectores debilitados por la crisis y vulnerables hacia otros sectores que gozarán de mayor protagonismo en el futuro.

Pero una de las mayores preocupaciones, hablando del desempleo, es la angustiada tasa de paro juvenil en España, que en octubre de 2020, alcanzó el 40,4 % y que pone de manifiesto serios problemas acerca de la formación, el trabajo, la excesiva temporalidad y precariedad de los contratos laborales de nuestros jóvenes que condicionan sobremanera su emancipación o la fecundidad y los desfases en la incorporación de nuestros jóvenes al mercado de trabajo: unos están sobrecualificados y otros infracualificados. Eso, entre otras cosas, conduce a la existencia de jóvenes adultos, treintañeros, que siguen viviendo con sus padres. La crisis del coronavirus agrava el problema crónico del desempleo juvenil en España.

El premio Nobel de Física en 1988, Jack Steinberger, sentenciaba tiempo atrás que *«el talento joven es lo mejor que tienen los países para salir adelante y, aquellos que no lo aprovechen corren el riesgo de volverse idiotas»*. Palabras que sería bueno calaran en nuestro país.

## Envejecimiento poblacional

Otro reto relevante que encara la economía española es el del envejecimiento poblacional, con una tasa de dependencia que, si actualmente roza el 30 %, se prevé que en los próximos años vaya al alza. Así, si en 2018 la población española entre 0 y 24 años era de 11,5 millones de personas y los mayores de 65 a 100 y más años sumaban 8,9 millones, en 2033 se calcula que la población de hasta 24 años será de 11,2 millones mientras los mayores de 65 años superarán los 12,3 millones. La esperanza de vida en España para 2028 se calcula en 87,07 años para las mujeres y en 82,15 años para los hombres y, lógicamente, una vida más saludable, junto con los avances en el campo de la medicina, ayuda a que vivamos más años con lo que se extienden las enfermedades crónicas, la cohorte de los mayores, o sénior, predomina y, hasta cierto punto, el mejor nivel educativo influye en el aumento de la esperanza de vida.

Desde el ángulo económico, el fenómeno del envejecimiento poblacional entraña consecuencias. Así, la cuantía de las pensiones que si en 2007, con 7,7 millones de pensionistas ascendía a 91.458 millones de euros, en 2020, con 9,5 millones entre pensionistas y funcionarios jubilados, asciende a 158.212 millones de euros y en 2021 sumará 163.297 millones.

El fondo de reserva de las pensiones que al acabar 2011 alcanzó su saldo máximo con 66.815 millones de euros, durante los años posteriores se ha ido vaciando y en la actualidad solo quedan en la llamada hucha de las pensiones 1.543 millones de euros. Entretanto, el endeudamiento de la Seguridad Social que en diciembre de 2015 era de 17.188 millones de euros, en diciembre de 2020 era de 85.355 millones.



El envejecimiento poblacional de España tiene sus impactos en las cuentas públicas tanto por lo concerniente a las pensiones como a los costes sanitarios y los cuidados de larga duración. Imagen cedida por Pixabay.

A su vez, el aumento de la población de mayor edad en España conlleva otra derivada: el coste de salud y protección social que, si en 1996 se cifró en 25.903 millones de euros y en el año 2000 en 33.320 millones, en 2020 se eleva a 84.007 millones de euros.

Por consiguiente, el envejecimiento poblacional, con un aumento de la pensión media de jubilación progresivo, tiene sus impactos en las cuentas públicas tanto por lo concerniente a las pensiones como a los costes sanitarios y los cuidados de larga duración, tensando el gasto público y con el inconveniente agregado de que las últimas reformas legales abordadas han suspendido los mecanismos compensatorios de la reforma de 2013. Esta neutralización en la andadura de embridar la ostensible tendencia en aumento de las pensiones comportará la necesidad de aprobar medidas complementarias que garanticen su sostenibilidad futura en el contexto de unas finanzas públicas que rezuman mayor vulnerabilidad y perspectivas amenazantes, con razonables dudas acerca de la consolidación fiscal que España tendría que acometer.

Países como Alemania, Italia o Suecia han introducido mecanismos de ajuste entre la esperanza de vida y el nivel de prestaciones o la edad de jubilación a fin de estabilizar el sistema de pensiones, cosa que en España se encaráó en 2013 pero después quedó en suspenso, con el objetivo de asegurar niveles de suficiencia entre las contribuciones realizadas al sistema financiero de pensiones y las prestaciones recibidas. En consecuencia, España, más pronto que tarde, estará compelida a introducir mecanismos que adecuen la edad de jubilación efectiva con la edad legal y el ineludible sostenimiento de las pensiones.

A ese respecto, conviene subrayar que el gasto social de nuestro país, incluyendo gasto en salud y protección social, se evalúa en 2020 en 336.029 millones de euros, que supone el 57 % del gasto público total.

En línea con 2020, en 2021, todas las pensiones subirán un 0,9 % y las pensiones no contributivas el 1,8 %. Lo que es bueno al alargarse la esperanza de vida y contar con más población sénior, que siempre da un empuje a la eco-

nomía, con pensiones cada vez más altas, pero con muchos jóvenes si no apeados sí descolgados del mundo laboral y con bajos ingresos, es un arma de doble filo por el desembolso anual por pensiones que de 2009 a 2021 se ha multiplicado 1,8 veces. De momento, las pensiones se satisfacen. Y sí, los recelos se ciernen sobre su sostenibilidad futura, asomando en el momento presente efectos distorsionadores que complican las pensiones.

Las cuentas públicas están presionadas por el combate contra la pandemia. El gasto público crece. Los ingresos se recortan. Los expedientes de regulación temporal de empleo –los famosos ERTE–, las ayudas a los autónomos, las prestaciones por desempleo no solo exigen mayores desembolsos, sino que afectan a las cotizaciones de los trabajadores e inciden a la baja en los ingresos del sistema financiero de las pensiones. Las jubilaciones de trabajadores que sufren paro temporal o prolongado desempleo, a causa de los períodos que vayan sumando de baja cotización, se constriñen. La deuda pública, entretanto, crece. Y la situación actual empaña para muchas personas las posibilidades de más ahorro. España adolece de elevadas tasas de paro y desempleo de larga duración, lo que repercute negativamente a la hora de calcular las pensiones que ya de por sí están tensionadas. Y el dinero público topa con límites para pagar tanto gasto...

## **Políticas de inclusión**

Las políticas de inclusión constituyen otro compromiso de la España actual. En 2019, el 25 % de la población española, 11,9 millones de personas sobre un total de 47,3 millones de habitantes, se hallaba en situación de pobreza o riesgo de exclusión social, mientras que en 2018 era el 26 % de la población. La crisis de la pandemia agrava aún más una situación muy complicada y el ingreso mínimo vital, cuya plasmación se encalla en los cauces de la Administración, puede contribuir a reducir el nivel de pobreza extrema, pero a modo de parche y, eso sí, evaluando su aplicación práctica. Uno de los riesgos latentes del ingreso mínimo vital es comprobar si sus beneficiarios se incorporan al mercado de trabajo y que no sea una vía a través de la cual haya un desplazamiento hacia sectores informales.



Por ello, el papel de la educación y la formación es determinante para mejorar las condiciones de vida, aunque, al propio tiempo, exige que la economía española se oriente hacia un modelo productivo distinto en el que la industria, sobre todo en su vertiente tecnológica, desempeñe una baza fundamental a la par que los servicios de alto valor añadido. Son varios los países europeos que sirven de referencia a seguir en lo inherente a estructura económica.

## **La sostenibilidad de las finanzas públicas**

El epígrafe postrero de nuestro trabajo tiene que dedicarse a unas breves reflexiones sobre el sesgo de nuestras cuentas públicas que exhiben perfiles muy desajustados. Garantizar su sostenibilidad, así como establecer una senda de consolidación fiscal seria, coherente y plurianual que exigirá en años venideros grandes esfuerzos en las políticas del gasto público y de los ingresos tributarios, no puede interpretarse como un tic temporal y con veleidades electoralistas. Por eso es necesario un gran pacto en el mapa político y parlamentario para lo que será, sin duda y cuando menos, una década de contundentes ajustes en nuestras finanzas públicas.

De lo contrario, es decir, si se mantienen los elevadísimos niveles de deuda pública que en 2020, 2021 y 2022 propenden incluso a un agravamiento y no se corrige el rumbo cada vez más resbaladizo del déficit público, España, huérfana ante el golpe provocado por la pandemia de unas mínimas palancas fiscales –a diferencia de Alemania y otros países del centro y norte de Europa–, no dispondrá de márgenes fiscales con los que hacer frente a eventuales perturbaciones adversas, a la par que está sobreexpuesta a una vulnerabilidad grave y crónica si se dieran cambios en el sentimiento de los mercados financieros –verbigracia, si el BCE va rebajando los estímulos monetarios o endurece las condiciones financieras subiendo los tipos de interés que hoy están en mínimos del cero por ciento–. En todo caso, el exagerado volumen de deuda pública y el sesgo peligroso y crónico del déficit lastran la capacidad de crecimiento de la economía española para los próximos años.

En la figura 1 se resume la perspectiva de los ingresos, gastos y déficit del conjunto de las Administraciones Públicas españolas desde el año 2008 hasta el año 2021, según las previsiones del Gobierno.

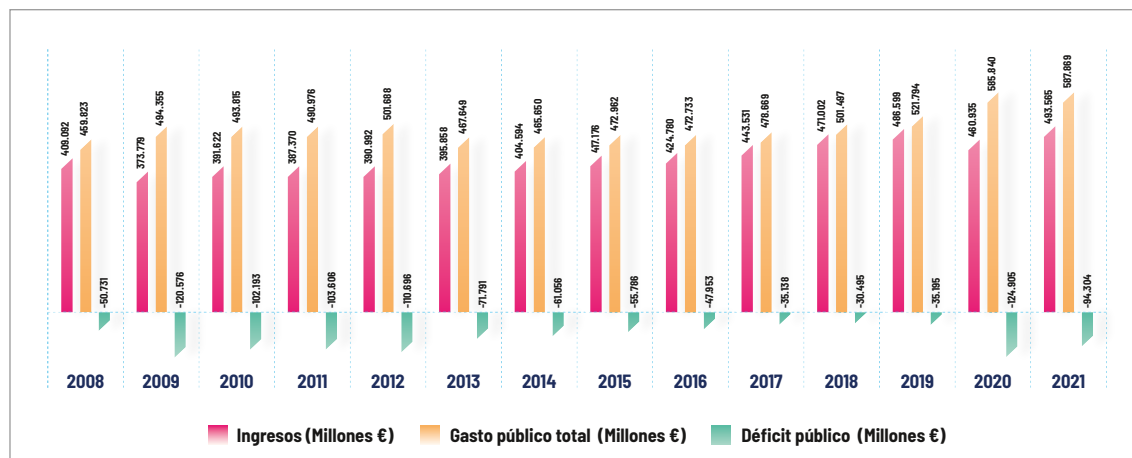


Figura 1. Ingresos, gastos y déficit de las Administraciones públicas españolas en el período 2008-2021, según las previsiones del Gobierno. Fuente: Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), Ministerio de Hacienda, Plan Presupuestario del Gobierno; datos a octubre de 2020.

Muy probablemente, atendiendo a los pronósticos del Banco de España, del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea, el déficit público de 2020 y 2021 supere las cifras presentadas por el Gobierno de España ante Bruselas en su Plan Presupuestario.

El grave inconveniente de esta evolución de nuestras cuentas públicas es que de 2008 a 2021 se habrá acumulado un déficit público que excederá del billón de euros y que se acercaría al 100 % del PIB de España en 2020.

La consecuencia inmediata de tales calibres de déficit se plasma en la trayectoria seguida por la deuda pública española de 2007 a 2021 (figura 2) que de suponer, al concluir 2007 el 35,8 % del PIB, en 2020 podría llegar al 117% y en 2021 el 125%.

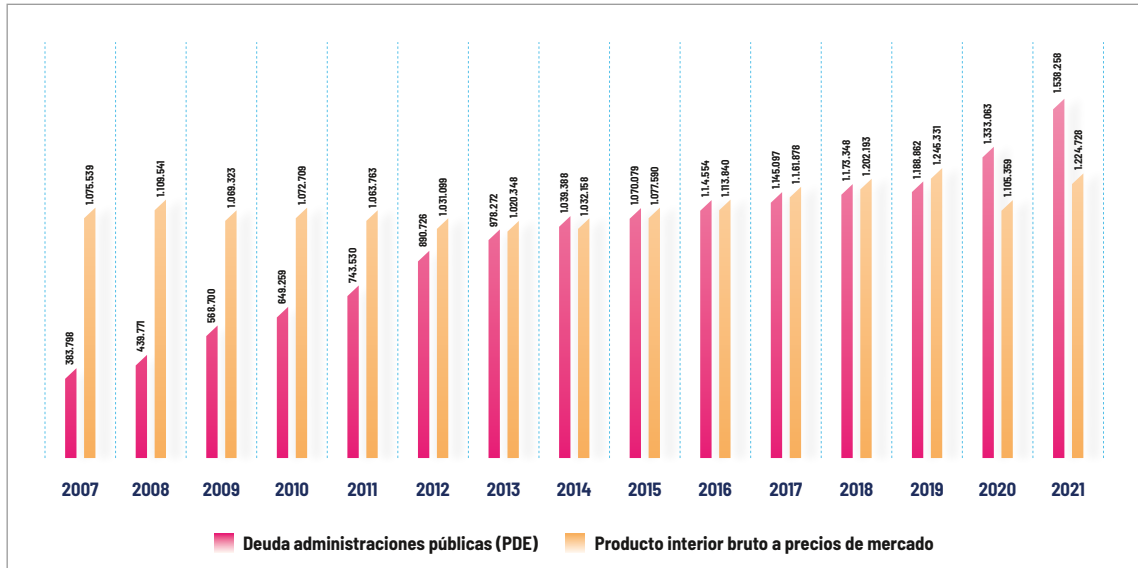


Figura 2. Deuda pública y PIB de España (en millones de euros). Fuente: Banco de España.

En la misma línea apuntada a propósito del déficit público, es preciso resaltar que los vaticinios sobre su porcentaje respecto al PIB formulados por los organismos mentados empeoran para 2020 y 2021.

Y si por lo demás se advierte cuál es la evolución seguida por los pasivos en circulación de las Administraciones Públicas, que incluyen la totalidad de la deuda contraída por el conjunto del Estado por todos los conceptos y no solo por la deuda estrictamente financiera, el panorama de nuestras finanzas públicas se tuerce aún más (figura 3).

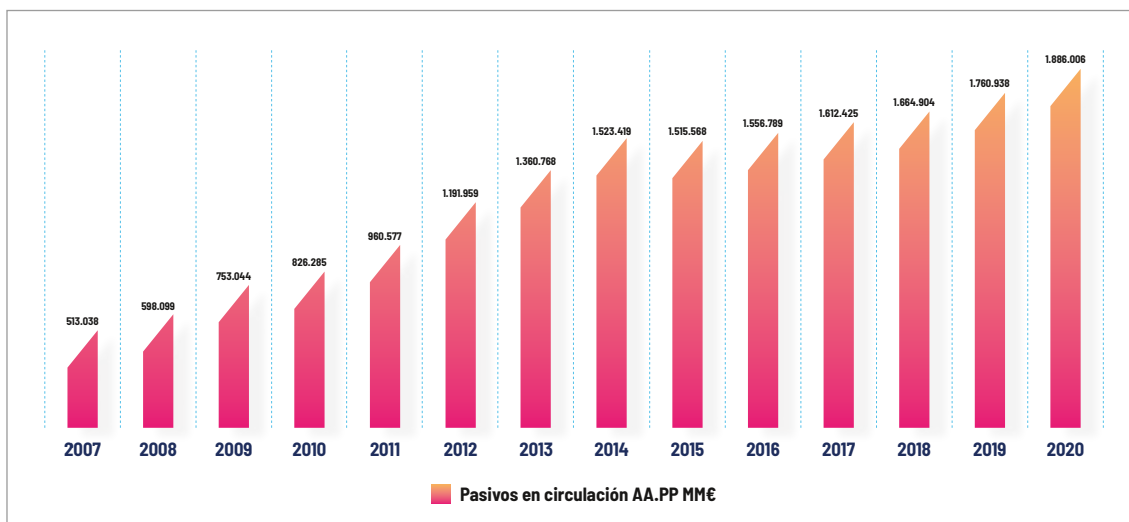


Figura 3. Pasivos en circulación de las Administraciones públicas españolas (en millones de euros). Fuente: Banco de España; datos de octubre de 2020.

En resumen, que si el total de la deuda pública de España en 2007 suponía 47,7 % del PIB, en junio de 2020 equivale al 161 % y si se suma la deuda contraída por las empresas públicas el monto total supera 1,9 billones de euros que constituye el 174 % del PIB.

En consecuencia, a medio plazo es ineludible emprender un inexorable programa de reducción gradual del déficit y del endeudamiento que encauce nuestras finanzas públicas ajustándose a las indicaciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Económica y Monetaria y, una vez disipados los impactos de la crisis, será menester aminorar progresivamente el déficit público estructural, recomendando el Banco de España que sea del orden del 0,5 % anual hasta lograr el objetivo de equilibrio que sería el de déficit cero, con lo cual la deuda pública, expresada en porcentaje sobre el PIB, tendería a reducirse. No obstante, la contumaz postura gubernamental de acrecentar el gasto público no productivo, más proclive a subsidios y ayudas que propicien votos electoralistas, se erige en un complicado obstáculo que salvar. Por ello, la intervención de Europa se hace muy necesaria para sujetar el sesgo de las cuentas públicas de España.

Para lograr los objetivos indicados es imprescindible articular un programa de consolidación fiscal apropiado, de manera que se pueda garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, y los objetivos presupuestarios tienen que trazarse necesaria y conjuntamente con las administraciones autonómicas, por las cuales fluye una parte considerable del gasto público.

Todo ello comporta establecer prioridades en los niveles y en la composición de los gastos e ingresos públicos, revisando las partidas que lo componen a fin de identificar márgenes para que sean más eficientes. Por ello, sería fundamental que esa revisión de los gastos e ingresos públicos se inspirara en la filosofía del llamado Presupuesto Base Cero, en aras de ajustar a la mínima expresión y, simultáneamente, examinar y replantear el sistema impositivo para mejorar su capacidad recaudatoria y sus parámetros de eficacia.

## CONCLUSIONES

Lo que se intuía como una perturbación temporal y pasajera que afectaría levemente a la economía con impactos poco significativos se ha tornado en un comprometido escenario en los órdenes sanitario, económico, social, político y financiero que amenaza seriamente la situación de muchos países y con mayor severidad el marco europeo que se muestra excesivamente sensible a las derivaciones de la pandemia. Como el año 2020 se salda con un signo muy negativo, está por ver si en 2021 habrá recuperación efectiva o un simple rebote desde el prisma económico, absolutamente marcado por la contención del virus y los resultados de las soluciones médicas en curso.

Se han arbitrado posibles soluciones en el plano internacional y más concretamente en el panorama europeo, aunque de forma muy lenta y cuyos efectos bonancibles están por ver. La parsimonia de la maquinaria de la Unión Europea, carente de reflejos, y su tediosa burocracia empañan la forzosa prontitud en la toma de decisiones y la puesta en marcha de planes de actuación inmediata. Estos defectos se visibilizan incluso con la aprobación legal de las vacunas para combatir la COVID-19 que en Reino Unido se em-

pezaron a aplicar en diciembre de 2020, en Estados Unidos se aprobaron por vía urgente y se implementaron también a primeros de diciembre y en la Unión Europea, en principio, hasta entrado el mes de enero no se iban a conceder las autorizaciones pertinentes, aunque por suerte la siempre decisiva intervención de Angela Merkel obligó a anticipar la luz verde de suerte que coincidiendo con los días navideños comenzaba la vacunación.

El engorroso y ceremonioso aparato europeísta significa un freno para acelerar medidas efectivas en la lucha contra la pandemia, tal cual sucede con la movilización de los recursos financieros para impulsar la reconstrucción económica de los países europeos. Que Europa va perdiendo posiciones en la hegemonía mundial en favor de Estados Unidos y China salta a la vista y, si en la carrera tecnológica cada vez anda más rezagada, en la vertiente económica se hace patente la pérdida de posiciones.



La reindustrialización de España tiene que estar basada en las tres íes: industria, innovación e internacionalización. Imagen cedida por Pixabay.

El paradigma para la reconversión y reconstrucción de la economía española exige un patrón basado en la productividad, la competitividad y la calidad, que son muy mejorables y eso aportaría energía. Para ello, es imprescindible la reindustrialización basada en tres íes: industria, innovación e internacionalización; aprovechando las infraestructuras ya existentes, promoviendo el ajuste de desequilibrios regionales promocionando lo que se da en llamar la España interior y vaciada. Crear polos de desarrollo industrial y tecnológico en el marco de una transición ecológica en la que nuestro país, con la apuesta por las energías renovables, puede ser un jugador solvente. Fomentar el sector primario y la fuerza de la industria agroalimentaria que goza de singular prestigio allende nuestras fronteras, y promover un salto

cualitativo en el sector turístico, más basado en referencias selectivas y personalizadas en vez de la masificación que lo ha caracterizado, que estimule otros activos tales como la cultura, gastronomía, deporte y calidad de vida. Además, el turismo propulsa sus efectos hacia otros sectores como el comercio, el ocio, el transporte aéreo, la hostelería y un largo etcétera de subsectores que en mayor o menor medida se benefician del empuje turístico.

En resumen, la viabilidad y relanzamiento de la economía española en pro de desarrollar el potencial de su crecimiento implica trabajar sobre una serie de extremos como son la mejora de la productividad, la senda de la recuperación empresarial que incluye el capital humano y el tecnológico, la reducción del paro y de la precariedad del empleo, el desafío del envejecimiento poblacional, actuar sobre políticas de inclusión, marcar los cauces para una transición hacia una economía verde, contar con un sistema financiero saneado que sea capaz de encajar los embates de los activos tóxicos susceptibles de germinar al calor de la actual crisis, afrontar los restos estructurales derivados de la era COVID-19 y, con particular énfasis, encarar la sostenibilidad de las finanzas públicas que lastran el crecimiento y la competitividad de nuestra economía, para lo cual será absolutamente necesario recurrir a ayudas europeas.

